

No. 55723*

**Peru
and
Chile**

**Convention on social security between the Republic of Peru and the Republic of Chile.
Santiago de Chile, 23 August 2002**

Entry into force: *1 March 2004, in accordance with article 29*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Peru, 18 March 2019*

Note: *See also annex A, No. 55723.*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Pérou
et
Chili**

**Convention de sécurité sociale entre la République du Pérou et la République du Chili.
Santiago du Chili, 23 août 2002**

Entrée en vigueur : *1^{er} mars 2004, conformément à l'article 29*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Pérou, 18 mars 2019*

Note : *Voir aussi annexe A, No. 55723.*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Y
LA REPÚBLICA DE CHILE**

La República del Perú y la República de Chile,

Animados por el deseo de regular sus relaciones en el área de la Seguridad Social, han convenido lo siguiente:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

DEFINICIONES

- 1.- Las expresiones y términos que se indican a continuación tienen, para efectos de la aplicación del presente Convenio, el siguiente significado:
- a) "**Legislación**", las leyes, reglamentos y disposiciones sobre cotizaciones y beneficios de los sistemas de Seguridad Social, que se indican en el Artículo 2º de este Convenio.
 - b) "**Autoridad Competente**", respecto del Perú, el Ministro de Economía y Finanzas y respecto de Chile, el Ministro del Trabajo y Previsión Social.
 - c) "**Organismo de Enlace**": Organismo de Enlace es el encargado de la coordinación para la aplicación del Convenio entre las Instituciones Competentes, como también de la información al interesado de los derechos y obligaciones derivados del mismo.

- d) **"Institución Competente" o "Entidad Gestora"**, designa la Institución u Organismo responsable, en cada caso, de la aplicación de la legislación a que alude el Artículo 2º de este Convenio.
- e) **"Pensión"**, una prestación pecuniaria que incluye suplementos, asignaciones y aumentos.
- f) **"Período de Seguro"**, todo período de cotizaciones reconocido como tal por la legislación bajo la cual se haya cumplido, así como cualquier lapso considerado por dicha legislación como equivalente a un período de seguro.
- g) **"Trabajador Dependiente"**, toda persona que está al servicio de un empleador bajo un vínculo de subordinación y dependencia, así como aquélla que se considere como tal por la legislación aplicable.
- h) **"Trabajador Independiente"**, toda persona que ejerce una actividad por cuenta propia, por la cual percibe ingresos, así como aquélla que se considere como tal, por la legislación aplicable.
- i) **"Personas protegidas"** : Los beneficiarios de los Sistemas de Seguridad Social, Previsión Social y Seguros Sociales señalados en el Artículo 2º.
- j) **"Afiado" o "asegurado"**: Todo trabajador dependiente o independiente que se encuentre incorporado a un sistema de capitalización individual o a un sistema de reparto de cualesquiera de las Partes Contratantes.
- k) **"Bono de reconocimiento"**: Cualquier Título Valor expresado en dinero que, conforme a la legislación interna correspondiente, represente los períodos de cotización efectuados en el sistema de reparto, con anterioridad a la afiliación al sistema de capitalización individual.
- l) **"Cotizaciones obligatorias"**: Son aquéllas que los trabajadores entregan o enteran obligatoriamente en el sistema de pensiones que corresponda.
- m) **"Cotizaciones voluntarias"**: Son aquéllas que los trabajadores enteran voluntariamente en el sistema de pensiones y que se destinan exclusivamente al pago de pensiones, bajo las consideraciones contempladas en la normatividad de cada país.

- n) **"Depósitos convenidos"**: Son las sumas que los trabajadores dependientes han acordado enterar, mediante contrato suscrito con su empleador, y que son de cargo de este último, en una entidad autorizada, con el fin de aumentar o adelantar su pensión.
 - ñ) **"Aportes del empleador"**: Son las sumas que se depositan en las cuentas individuales de los trabajadores, realizados por el empleador, en una entidad autorizada, con el fin de aumentar o adelantar su pensión, bajo los mecanismos que cada Parte Contratante establezca en su legislación.
 - o) **"Pensión garantizada por el Estado"**: Es aquella pensión mínima, que garantiza el Estado a los afiliados al sistema de pensiones basado en la capitalización individual que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.
- 2.- Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio, tienen el significado que les atribuye la legislación que se aplica.

Artículo 2º

AMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL

- 1.- El presente Convenio se aplicará:
- A) Respecto de Chile, a la legislación sobre:
 - a) El Sistema de Pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual.
 - b) Los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y
 - c) Los regímenes de prestaciones de salud, para efectos de lo dispuesto en los artículos 10º y 17º, Nº7.

Artículo 3º

AMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL

El presente Convenio se aplicará a:

- a) Los nacionales de las dos Partes Contratantes que estén o hayan estado sujetos a la legislación mencionada en el Artículo 2º;
- b) Los nacionales de un tercer país, que estén o hayan estado sujetos a la legislación mencionada en el Artículo 2º.
- c) Las personas que deriven sus derechos de las mencionadas en las letras a) y b).

Artículo 4º

IGUALDAD DE TRATO

Las personas mencionadas en el Artículo 3º que residan o permanezcan en el territorio de una Parte Contratante, tendrán las mismas obligaciones y derechos que la legislación de esa Parte Contratante establece para sus nacionales.

Artículo 5º

EXPORTACIÓN DE PENSIONES

- 1.- Las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia que se paguen de acuerdo con la legislación de una Parte Contratante no podrán estar sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en la otra Parte, con la sola excepción de gastos y tributación que demanda el pago de la prestación económica.

- 2.- Las prestaciones señaladas en el párrafo precedente debidas por una de las Partes Contratantes a los beneficiarios de la otra Parte Contratante cuando residan en un tercer país, se harán efectivas en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país.

TITULO II

DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 6º

REGLA GENERAL

Los trabajadores a quienes sea aplicable el presente Convenio, estarán sujetos a la legislación de la Parte Contratante del territorio en el cual ejercen o, en su defecto, hayan ejercido la actividad laboral, cualquiera sea su domicilio o la sede de su empleador, salvo las excepciones señaladas en los Artículos 7º al 9º.

Artículo 7º

REGLAS ESPECIALES TRABAJADORES DESPLAZADOS

Los trabajadores dependientes que ejercen su actividad en el territorio de una de las Partes Contratantes y que sean enviados al territorio de la otra Parte por un período de tiempo limitado, continuarán sujetos a la legislación de la primera Parte, siempre que dicha permanencia no exceda de tres meses. Si excediera dicho plazo, el trabajador podrá continuar sujeto a esa legislación, siempre que la Autoridad Competente de la Parte Contratante receptora, o quien ésta designe, brinde su conformidad.

A) Respecto del Perú, a la legislación sobre:

- a) A las disposiciones legales de los sistemas o regímenes de seguridad social que administra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en lo referente a prestaciones de pensiones de invalidez, jubilación y sobrevivencia.
- b) Al Sistema Privado de Pensiones, a cargo de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) y supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
- c) Los regímenes de prestaciones de salud, para efectos de lo dispuesto en el artículo 10º.

C) Disposiciones Comunes:

- a) El presente Convenio se aplicará igualmente a las disposiciones legales que en el futuro complementen o modifiquen las mencionadas en el párrafo precedente, siempre que la Autoridad Competente de una Parte no comunique objeción alguna a la otra, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de tales leyes, reglamentos o disposiciones.
- b) Las normas de los Convenios bilaterales o multilaterales celebrados por las Partes, no afectarán la aplicación de las normas del presente Convenio.
- c) En materia de tributación se aplicará la legislación tributaria interna de cada Estado, sin perjuicio de la aplicación del Convenio para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación el Impuesto a la Renta y al Patrimonio, suscrito entre las Repúblicas del Perú y Chile en el año 2001.

Artículo 8º

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y PERSONAL DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

- 1.- Este Convenio no afectará lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963.
- 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, los nacionales de una Parte Contratante, contratados en el territorio de la otra Parte al servicio de una Misión Diplomática o de una Oficina Consular de la primera, estarán sujetos a las disposiciones legales sobre seguridad social, señaladas en el Artículo 2º, de la segunda Parte Contratante, salvo que dentro del período de 6 meses, contado desde el inicio de sus servicios o desde la vigencia del presente Convenio, opten por sujetarse a dichas disposiciones legales de la primera Parte Contratante.
- 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, las disposiciones del párrafo 2 de este Artículo serán aplicables también a quienes trabajen como personal de servicio de la Misión Diplomática o de una Oficina Consular y a quienes se desempeñen como personal de servicio, contratado por un miembro del personal diplomático, por un funcionario consular o por el personal administrativo y técnico de la Misión Diplomática o de una Oficina Consular.
- 4.- El funcionario público que sea enviado oficialmente por una de las Partes Contratantes al territorio de la otra Parte Contratante, continuará sometido a la legislación de la primera Parte, sin límite de tiempo.

Artículo 9º

TRABAJADORES A BORDO DE UNA NAVE O AERONAVE

- 1.- El trabajador dependiente que ejerza su actividad a bordo de una nave estará sometido a la legislación del Estado cuyo pabellón enarbole esa nave. Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga y reparación de naves o en servicios de vigilancia u otros, en un puerto,

estarán sometidos a la legislación del país a cuyo territorio pertenezca el puerto.

- 2.- El personal itinerante perteneciente a empresas de transporte aéreo que desempeñe su actividad en ambas Partes Contratantes, estará sujeto a la legislación del país donde la Empresa tenga su sede principal. Sin embargo, cuando dicho personal resida en el territorio de la otra Parte Contratante, estará sujeto a su legislación.

TITULO III

DISPOSICIONES RELATIVAS A PRESTACIONES

Artículo 10º

PRESTACIONES DE SALUD PARA PENSIONADOS

Las personas que residan en el territorio de una Parte Contratante y perciban pensiones conforme a la legislación de la otra Parte Contratante, tendrán derecho a prestaciones de salud no pecuniarias, de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante en que residen, en las mismas condiciones que las personas que perciben prestaciones similares conforme a la legislación de esa Parte.

CAPITULO II

PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

Artículo 11º

TOTALIZACION DE PERÍODOS DE SEGURO

- 1.- Cuando la legislación de una de las Partes Contratantes exija el cumplimiento de determinados períodos de seguro para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a beneficios de invalidez, vejez o sobrevivencia, los períodos cumplidos según la legislación de la otra Parte Contratante se sumarán, cuando sea necesario, a los períodos cumplidos bajo la legislación de la primera Parte Contratante, siempre que ellos no se superpongan.

- 2.- Cuando no sea posible precisar la época en que determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos bajo la legislación de una de las Partes, se presumirá que dichos períodos no se superponen con períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte Contratante.
- 3.- El cómputo de los períodos correspondientes se regirá por las disposiciones legales de la Parte Contratante en la cual fueron prestados los servicios respectivos.
- 4.- Cada Institución Competente o Entidad Gestora determinará con arreglo a su legislación, y teniendo en cuenta la totalización de períodos, si el interesado cumple las condiciones requeridas para obtener la prestación. En caso afirmativo, determinará el importe de la prestación a que el interesado tendría derecho, como si todos los períodos totalizados se hubieren cumplido bajo su propia legislación y fijará el mismo en proporción a los períodos cumplidos, exclusivamente, bajo dicha legislación.
- 5.- El derecho de las prestaciones de quienes, teniendo en cuenta la totalización de períodos computables, no cumplan al mismo tiempo las condiciones exigidas por las disposiciones legales de ambas Partes Contratantes, se determinará con arreglo a las disposiciones de cada una de ellas a medida que se vayan cumpliendo dichas condiciones.
- 6.- En aplicación del presente Convenio, las pensiones que se otorguen con totalización de períodos de seguro, se nivelarán al monto de la pensión mínima establecida en la legislación de cada Parte Contratante, determinándose el monto de la pensión mínima de acuerdo a la que rige en cada Parte Contratante y de manera proporcional al tiempo efectivamente aportado en cada una de ellas.

Artículo 12º

ASIMILACIÓN DE LOS PERÍODOS DE SEGURO

Si la legislación de una Parte Contratante subordina el otorgamiento de las prestaciones a la condición que el trabajador esté sometido a esa legislación en el momento en el cual se presenta la contingencia que da origen a la prestación, dicha condición se entenderá cumplida si al verificarse esa

contingencia, el trabajador está cotizando o percibe pensión en la otra Parte Contratante.

Artículo 13°

PERÍODOS INFERIORES A UN AÑO

Las Instituciones Competentes o Entidades Gestoras de las Partes Contratantes, sólo otorgarán prestaciones si los períodos de seguro cumplidos conforme a la legislación aplicable, alcanzan a sumar a lo menos un año, salvo que dichos períodos concedan por sí solos el derecho a una prestación, conforme a dicha legislación.

Artículo 14°

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ

- PARA SISTEMAS ADMINISTRADOS POR EL ESTADO

1. Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo para efectos del otorgamiento de las correspondientes pensiones de invalidez, la Institución Competente o Entidad Gestora de cada una de las Partes Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación a la que está sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados por la Institución Competente o Entidad Gestora del lugar de residencia a petición de la Institución Competente o Entidad Gestora de la otra Parte Contratante.
- 2.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Institución Competente o la Entidad Gestora de la Parte Contratante en que resida el beneficiario pondrá a disposición de la Institución Competente o la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante, a petición de ésta y gratuitamente, los informes y documentos médicos que obren en su poder.
- 3.- En caso de que la Institución Competente o la Entidad Gestora del Perú estime necesario que en Chile se realicen exámenes médicos que sean de su exclusivo interés, éstos serán financiados por dicha Institución Competente o Entidad Gestora. No obstante en tal situación esta

Institución Competente o Entidad Gestora requerirá directamente al interesado el reembolso del 50% del costo de tales exámenes.

- 4.- En caso que la Institución Competente o Entidad Gestora chilena estime necesario la realización de exámenes médicos en Perú, que sean de su exclusivo interés, el costo de éstos serán financiados conforme a la legislación interna chilena.

- **PARA SISTEMAS DE PENSIONES BASADOS EN CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL**

- 5.- Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo para efectos del otorgamiento de las correspondientes pensiones de invalidez, la Institución Competente o Entidad Gestora de cada una de las Partes Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación a la que está sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados por la Institución Competente o Entidad Gestora del lugar de residencia a petición de la Institución Competente o Entidad Gestora de la otra Parte Contratante.
- 6.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Institución Competente o la Entidad Gestora de la Parte Contratante en que resida o haya residido el beneficiario pondrá a disposición de la Institución Competente o la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante, a petición de ésta y gratuitamente, los informes y documentos médicos que obren en su poder.
- 7.- En caso de que la Institución Competente o la Entidad Gestora de una Parte Contratante estime necesario que en la otra Parte se realicen exámenes médicos que sean de su exclusivo interés, éstos serán financiados conforme a la legislación interna de la primera Parte Contratante.

Cuando los nuevos exámenes se soliciten a propósito de una reclamación interpuesta al dictamen de invalidez emitido en Chile, el costo de tales exámenes será financiado de la forma señalada en el párrafo anterior, salvo que la reclamación sea interpuesta por una Institución Competente o Entidad Gestora chilena o por una compañía de seguros, en cuyo caso tales gastos serán financiados por el reclamante.

Cuando se trate de trabajadores afiliados al Sistema de Capitalización Individual de Chile, la Institución Competente o Entidad Gestora chilena efectuará el reembolso del costo total de estos exámenes, debiendo requerir del interesado el porcentaje a su cargo. No obstante, la Institución Competente o Entidad Gestora chilena, podrá deducir el costo que le corresponde asumir al interesado de las pensiones devengadas o del saldo de la cuenta de capitalización individual.

Artículo 15°

PRESTACIONES POR SEPELIO

Las prestaciones por sepelio se regirán por la legislación que fuere aplicable al asegurado en el lugar y fecha de su fallecimiento.

Artículo 16°

APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PERUANA

A. Sistema Privado de Pensiones

- 1.- Los afiliados a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones del Perú financiarán sus pensiones con el saldo acumulado en su cuenta individual de capitalización que, de ser el caso, incluye el Bono de Reconocimiento. Cuando éste fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado, se podrá verificar, de conformidad con la normatividad legal vigente, el acceso a dicho beneficio, totalizando los períodos computables de acuerdo con el Artículo 11°, determinando el monto de la pensión mínima de acuerdo a la que rige en Perú y de manera proporcional al tiempo efectivamente aportado en dicho país.
- 2.- Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos que exigen las disposiciones legales peruanas para pensionarse anticipadamente en el Sistema de Capitalización Individual, se considerarán las remuneraciones afectas a aportes que se hayan recibido en ambos países contratantes, conforme lo establezca la regulación interna de Perú. Para el cálculo de promedio de remuneraciones, se

utilizarán los factores de conversión que establezca la Institución Competente o la Entidad Gestora del Perú.

- 3.- La redención o liquidación del Bono de Reconocimiento se hará efectiva únicamente en los casos que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles para su redención, de conformidad con la ley peruana.
- 4.- Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, los trabajadores que se encuentren afiliados al sistema previsional basado en la capitalización individual en Perú, podrán cotizar voluntariamente a dicho sistema en calidad de trabajadores independientes durante el tiempo que residan en Chile, sin perjuicio de cumplir además con la legislación de esta última Parte relativa a la obligación de cotizar. Los trabajadores que opten por hacer uso de este beneficio quedarán exentos de aportar la cotización destinada al financiamiento de las prestaciones de salud en Perú.

B. Sistema Nacional de Pensiones.

- 5.- Las prestaciones que otorga la Oficina de Normalización Previsional (ONP) son: pensión de jubilación, de invalidez, de sobrevivencia, esta última comprende viudez, orfandad y ascendiente.
- 6.- La Entidad Gestora o Institución Competente determinará el valor de la Prestación como si todos los periodos de seguro hubieren sido cumplidos conforme a su propia legislación y, para efectos del pago del beneficio, calculará la parte de su cargo en base a la proporción existente entre los periodos de seguro cumplidos exclusivamente bajo esa legislación y el total de periodos de seguro exigidos por la legislación peruana.

Artículo 17º

APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CHILENA

1. Los afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones financiarán sus pensiones en Chile con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual. Cuando éste fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado, los afiliados tendrán derecho a la totalización

de períodos computables de acuerdo al Artículo 11° para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. El monto de la pensión mínima se determinará de acuerdo con la legislación chilena y de manera proporcional al tiempo efectivamente cotizado en dicho país.

- 2.- Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos que exigen las disposiciones legales chilenas para pensionarse anticipadamente en el Sistema de Capitalización Individual, se considerarán las remuneraciones afectas a aportes que se hayan recibido en ambos países contratantes, conforme lo establezca la regulación interna chilena. Para el cálculo del promedio de remuneraciones, se utilizarán los factores de conversión que establezca la Institución Competente o la Entidad Gestora de Chile
3. Los trabajadores que se encuentren afiliados al Sistema de Capitalización Individual en Chile, podrán aportar voluntariamente en dicho Sistema cotizaciones previsionales en calidad de trabajadores independientes durante el tiempo que residan en Perú, sin perjuicio de cumplir además, con la legislación de dicho país relativa a la obligación de cotizar. Los trabajadores que opten por hacer uso de este beneficio quedarán exentos de la obligación de aportar la cotización destinada al financiamiento de las prestaciones de salud en Chile.
4. Los imponentes o aportantes de los regímenes de pensión administrados por el Instituto de Normalización Previsional, también tendrán derecho al cómputo de períodos en los términos del Artículo 11° para acceder a los beneficios de pensión establecidos en las disposiciones legales que les sean aplicables.
- 5.- En los casos contemplados en los párrafos 1 y 4 del presente Artículo, la Institución Competente o Entidad Gestora determinará el valor de la prestación como si todos los períodos de seguro totalizados hubieren sido cumplidos conforme a su propia legislación y, para efectos del pago del beneficio, calculará la parte de su cargo como la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos exclusivamente bajo esa legislación y el total de períodos de seguro que exige el respectivo régimen previsional.
- 6.- Tratándose de pensiones mínimas que sean de cargo del Instituto de Normalización Previsional, la determinación de las mismas se hará en la forma prevista en el párrafo anterior y, para efectos de su pago, el cálculo se hará en base a la proporción existente entre los períodos de

seguro cumplidos exclusivamente en Chile y el total de períodos de seguro registrados en ambas Partes Contratantes.

- 7.- Las personas que perciban pensiones conforme a la legislación peruana y que residan en Chile, tendrán derecho a prestaciones de salud no pecuniarias, de acuerdo con la legislación chilena, en las mismas condiciones que los pensionados chilenos.

Artículo 18°

TRASPASO DE FONDOS PREVISIONALES ENTRE SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN

1. Para efecto de las prestaciones que otorgue el Sistema de Capitalización Individual de Chile y el Sistema Privado de Pensiones de Perú, se reconoce el derecho de los trabajadores de transferir el saldo acumulado en sus cuentas de capitalización individuales de una Parte Contratante a otra, con el fin que sean administrados por la Administradora Privada de Fondos de Pensiones de su elección.
2. El traslado de fondos implica la transferencia de los fondos de pensiones depositados en sus cuentas individuales de capitalización hacia otra Entidad Gestora o Institución Competente del sistema de capitalización individual del otro país, en donde se vaya a residir de modo permanente. Para garantizar la naturaleza previsional, se deberá acreditar aportación a un sistema de capitalización individual de al menos 60 meses o tener la calidad de pensionado en el país al que se desea trasladar los fondos. Las Autoridades Competentes, de común acuerdo, podrán establecer la ampliación o reducción del mencionado límite.

Para tal efecto, este proceso implica el traslado de los recursos de la cuenta individual más el bono de reconocimiento, si lo hubiera, y en tanto se cumpla con los requisitos de redención o liquidación de cada país, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.

3. Los fondos previsionales a traspasar deben considerar la totalidad de las cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o aportes del empleador, según sea el caso, que el afiliado mantenga en su cuenta individual, a la fecha del traslado. Dichos fondos ingresarán en la parte receptora a la cuenta individual del trabajador en calidad de cotizaciones obligatorias.

Tratándose de cotizaciones voluntarias enteradas en Chile, éstas podrán formar parte del traspaso a que se refiere el párrafo anterior, en cuyo caso estarán afectas a las normas tributarias chilenas que gravan los retiros de dichas cotizaciones desde la cuenta de capitalización individual. Para efectos de esta tributación, estos afiliados se considerarán como pensionados.

El traspaso de fondos también debe considerar los Depósitos Convenidos que el afiliado tuviese en alguna otra Administradora de Fondos de Pensiones diferente a la de afiliación u otra Institución, de acuerdo a la legislación que corresponda.

4. Los beneficios previsionales que se otorguen en Chile, en cuyo financiamiento hayan concurrido fondos previsionales provenientes desde Perú, quedarán afectos a las normas tributarias chilenas en la parte que corresponda a las cotizaciones enteradas en el sistema previsional chileno y en cuanto a la rentabilidad que obtengan los fondos traspasados.
5. La redención o liquidación del Bono de Reconocimiento se hará efectiva únicamente en los casos que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles para su redención o liquidación, de conformidad con la ley de la Parte Contratante en que el Bono fue emitido. Si de acuerdo a la legislación de la Parte Contratante desde la cual se retiran los fondos previsionales, no correspondiese la redención o liquidación del bono de reconocimiento el afiliado tendrá derecho a transar dicho documento en el mercado secundario formal de esa Parte Contratante, sólo para efectos del referido traspaso.
6. El seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio o cuota mortuoria de los trabajadores afiliados al sistema de capitalización individual se rige por la ley del país en que la respectiva Administradora se encuentre domiciliada. Para estos efectos, los trabajadores que trasladen su cuenta individual de capitalización, conforme a lo antes señalado, tienen la condición de trabajadores nuevos o recién incorporados.
7. Los afiliados que a la fecha de la entrada en vigencia del Convenio, se encontraren pensionados bajo la legislación de una de las Partes Contratantes, tendrán derecho a solicitar de la otra Parte, el traslado de sus fondos previsionales a la Parte donde recibe pensión, la cual una vez que reciba los fondos, deberá recalcular el monto de beneficio o añadirlo, según sea el caso, de acuerdo con su legislación.

TITULO IV

CAPITULO I

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 19º

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, COMUNICACIONES O APELACIONES DENTRO DE PLAZO

Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de la aplicación de la legislación de una Parte Contratante, deban ser presentados en un plazo determinado ante las Autoridades o Instituciones correspondientes de esa Parte, se considerarán como presentados ante ella si lo hubieran sido dentro del mismo plazo ante la Autoridad o Institución correspondiente de la otra Parte Contratante.

Artículo 20º

EXENCION DE IMPUESTOS, DERECHOS Y EXIGENCIAS DE LEGALIZACION

Todos los actos, documentos, gestiones, escritos relativos a la aplicación del presente Convenio, Acuerdos Administrativos y demás Instrumentos adicionales, quedan exentos de tributos, de sellos, timbres o estampillas, como también de la obligación de visación o legalización por parte de las Autoridades diplomáticas o consulares, bastando la certificación del respectivo Organismo de Enlace

Artículo 21º

ASISTENCIA RECÍPROCA

1. Para la aplicación de este Convenio las Autoridades Competentes, los Organismos de Enlace y las Instituciones Competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia recíproca gratuita.

2. Los Organismos de Enlace se comprometen a intercambiar informaciones relacionadas con las medidas adoptadas para la mejor aplicación de este Convenio, Acuerdos Administrativos y demás instrumentos adicionales.
3. Las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace e Instituciones Competentes de las Partes Contratantes, podrán comunicarse entre si y con las personas interesadas, directamente o a través de canales diplomáticos y consulares.
4. Las autoridades diplomáticas y consulares de las Partes Contratantes podrán representar, sin mandato gubernamental especial, a sus propios nacionales ante las Autoridades Competentes y las Entidades Gestoras en materia de Seguridad Social de la otra Parte Contratante, a petición expresa de los interesados para el sólo efecto de agilizar el otorgamiento de las prestaciones médicas o pecuniarias, sin incluir la percepción de las mismas. Tratándose de los sistemas de capitalización individual, no se aceptará tal representación para efectos de la selección de la modalidad de pensión por la cual opte el afiliado.

Artículo 22°

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información referida a una persona, que se remita o se transmita de una Parte a la Otra, se utilizará con el único propósito de aplicar el presente Convenio, quedando amparada por el principio de protección a la privacidad y confidencialidad de la vida privada, en los términos establecidos por la legislación interna correspondiente.

Artículo 23°

MONEDA, FORMA DE PAGO Y DISPOSICIONES RELATIVAS A DIVISAS

- 1.- Los pagos que procedan en virtud de este Convenio se podrán efectuar en la moneda de cualesquiera de las Partes Contratantes, o en dólares de los Estados Unidos de América, a petición del interesado.

- 2.- La fecha y forma de pago del beneficio se efectuará conforme a la legislación de la Parte que realiza dicho pago.
- 3.- En caso de que una de los Partes Contratantes imponga restricciones sobre divisas, ambas Partes Contratantes acordarán, sin dilación, las medidas que sean necesarias, para asegurar las transferencias entre las Partes Contratantes, respecto de cualquier suma que deba pagarse en conformidad con el presente Convenio.

Artículo 24º

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes deberán:

- a) Establecer los Acuerdos Administrativos necesarios para la aplicación del presente Convenio.
- b) Designar los respectivos Organismos de Enlace.
- c) Comunicarse las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación del presente Convenio.
- d) Notificarse toda modificación de la legislación indicada en el Artículo 2º.
- e) Prestarse sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa posible para la aplicación de este Convenio.

Artículo 25º

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 1.- Las Autoridades Competentes deberán resolver mediante negociaciones las diferencias de interpretación del presente Convenio y de sus Acuerdos Administrativos.
- 2.- Si una controversia no pudiera ser resuelta mediante negociaciones en un plazo de seis meses, a partir de la primera petición de negociación, ésta

deberá ser sometida a un Tribunal Arbitral de tres miembros, cuya composición y procedimiento serán fijados en el Acuerdo Administrativo. La decisión del Tribunal Arbitral será obligatoria y definitiva.

CAPITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 26º

COMPUTO DE PERÍODOS ANTERIORES A LA VIGENCIA DEL CONVENIO

- 1.- Los períodos de seguro cumplidos según la legislación de una Parte Contratante antes de la entrada en vigencia del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo.
- 2.- Lo dispuesto precedentemente no modifica las normas sobre prescripción o caducidad vigentes en cada una de las partes Contratantes.

Artículo 27º

CONTINGENCIAS ACAECIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

- 1.- La aplicación de este Convenio otorgará derecho a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el pago de las mismas no se efectuará por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio.
- 2.- Las prestaciones que hayan sido liquidadas por una o ambas Partes Contratantes o los derechos que hayan sido denegados antes de la entrada en vigencia del Convenio, serán revisados a petición de los interesados o de oficio, teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio. El monto de la pensión resultante de este nuevo cálculo no podrá ser inferior al de la prestación primitiva. No se revisarán las prestaciones abonadas que hayan consistido en una cantidad única.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28°

DURACIÓN DEL CONVENIO

- 1.- El presente Convenio se celebra por tiempo indefinido. Podrá ser denunciado por cualesquiera de las dos Partes Contratantes. La denuncia deberá ser notificada por vía diplomática, produciéndose el término del Convenio transcurridos doce meses contados desde la fecha de la denuncia.
- 2.- En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio continuarán aplicándose a los derechos ya reconocidos, no obstante las disposiciones restrictivas que la legislación de cualesquiera de las Partes Contratantes pueda prever para los casos de residencia en el extranjero de un beneficiario.
- 3.- Las Partes Contratantes establecerán un acuerdo especial para garantizar los derechos en curso de adquisición derivados de los períodos de seguro o equivalentes cumplidos con anterioridad a la fecha de término de la vigencia del Convenio.

Artículo 29°

APROBACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO

- 1.- El presente Convenio se aprobará de acuerdo con la legislación interna de cada una de las Partes Contratantes.
- 2.- El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquél en que se haya recibido la última notificación de las Partes de que se han cumplido todos los requisitos constitucionales y reglamentarios para la entrada en vigor del mismo.

EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados firman el presente Convenio.

Hecho en dos ejemplares, en Santiago, Chile, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil dos.

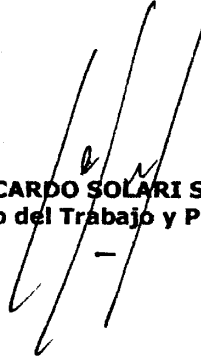
POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ



ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores



POR LA REPÚBLICA DE CHILE



RICARDO SOLARI SAAVEDRA
Ministro del Trabajo y Previsión Social

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF PERU AND
THE REPUBLIC OF CHILE

The Republic of Peru and the Republic of Chile,

Desiring to regulate their relations in the area of social security, have agreed as follows:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

(a) “Laws” means the laws, regulations and provisions relating to contributions and benefits in the social security systems referred to in article 2 of this Agreement;

(b) “Competent authority” means, in relation to Peru, the Minister of Economic Affairs and Finance and, in relation to Chile, the Minister of Labour and Social Security;

(c) “Liaison body” means the body responsible for coordination between the competent agencies in the application of the Agreement, as well as for informing the parties concerned of the rights and obligations arising therefrom;

(d) “Competent agency” or “managing entity” means the agency or body which is responsible, in each case, for the application of the laws referred to in article 2 of this Agreement;

(e) “Pension” means a cash benefit, including supplements, allowances and increases;

(f) “Period of coverage” means any period of contribution recognized as such in the laws under which it was completed, as well as any other period recognized as equivalent to a period of coverage under those laws;

(g) “Employed person” means any person who is in the service of an employer in a subordinate and dependent relationship, as well as any person considered as such under the applicable laws;

(h) “Self-employed person” means any person who performs, on a self-employed basis, an activity from which he or she receives income, as well as any person considered as such under the applicable laws;

(i) “Covered persons” means the beneficiaries of the social security, social welfare and social insurance systems referred to in article 2;

(j) “Participant” or “insured person” means any employed or self-employed person participating in an individually funded system or a contributory system of either of the Contracting Parties;

(k) “Recognition bond” means any security expressed in cash that, in accordance with the relevant domestic laws, represents the contribution periods made to a contributory system prior to joining an individually funded system;

(l) “Compulsory contributions” means the contributions that workers are required to make or pay into the appropriate pension systems;

(m) “Voluntary contributions” means contributions that workers voluntarily pay into the pension system that are intended exclusively for the payment of pensions, under the regulations of each country;

(n) “Agreed deposits” means the amounts that dependent workers have agreed to pay, under a contract signed with their employer, and which are payable by the latter to an authorized entity for the purpose of increasing or accelerating their pensions;

(o) “Employer contributions” mean the amounts that are deposited by the employer in the individual accounts of workers in an authorized entity for the purpose of increasing or accelerating their pensions, under the mechanisms that each Contracting Party establishes in its laws;

(p) “State-guaranteed pension” means the minimum pension guaranteed by the State to participants in the individually funded pension system who meet the requirements established by law.

2. Other terms or expressions used in this Agreement shall have the meaning assigned to them in the applicable laws.

Article 2. Material scope

1. This Agreement shall apply:

A) In relation to Chile, to the laws concerning:

(a) The system of old-age, disability and survivors’ pensions, based on individual funding;

(b) Old-age, disability and survivors' pension schemes administered by the Institute of Social Security Standardization; and

(c) Health insurance schemes, for the purposes of articles 10 and 17, paragraph 7.

B) In relation to Peru, to the laws concerning:

(a) The legal provisions of the social security systems or schemes administered by the Office of Social Security Standardization (ONP) with regard to disability, retirement and survivors’ pensions;

(b) The private pension system, managed by the Administrators of Private Pension Funds (AFP) and overseen by the Office of the Superintendent of Banking and Insurance (SBS);

(c) Health insurance schemes, for the purposes of article 10.

C) Common provisions:

(a) This Agreement shall also apply to any future legal provisions supplementing or amending those mentioned in the preceding paragraph, unless the competent authority of one Party informs the other of an objection within six months of notification of such laws, regulations or provisions;

(b) The provisions of bilateral or multilateral agreements concluded by the Parties shall not affect the application of the provisions of this Agreement;

(c) In matters of taxation, the domestic tax laws of each State shall apply, without prejudice to the application of the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed between the Republics of Peru and Chile in 2001.

Article 3. Personal scope

This Agreement shall apply to:

- (a) Nationals of the two Contracting Parties who are or have been subject to the laws referred to in article 2;
- (b) Nationals of a third country who are or have been subject to the laws referred to in article 2;
- (c) Persons deriving their rights from the persons referred to in (a) and (b).

Article 4. Equality of treatment

Persons referred to in article 3 who reside or stay in the territory of a Contracting Party shall have the same obligations and rights as the laws of that Contracting Party provide for its nationals.

Article 5. Export of pensions

1. Disability, old-age and survivors' pensions paid under the laws of one Contracting Party may not be reduced, modified, suspended or withheld on the ground that the beneficiary is staying or residing in the other Party, with the single exception of costs and taxes required for payment of the financial benefit.

2. Benefits referred to in the preceding paragraph which are owed by one Contracting Party to beneficiaries of the other Contracting Party residing in a third country shall be paid under the same conditions and for the same period of time as those paid to its own nationals residing in that third country.

TITLE II. PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LAWS

Article 6. General rule

Workers to whom this Agreement applies shall be subject to the laws of the Contracting Party in the territory of which they work, or have worked, irrespective of their domicile or of the headquarters of their employer, apart from the exceptions indicated in articles 7 to 9.

Article 7. Special rules for workers on assignment

Dependent workers who work in the territory of one Contracting Party and are sent to the territory of the other Party for a limited period of time shall remain subject to the laws of the first Party, provided that the duration of their stay does not exceed three months. If that time limit is exceeded, the worker may continue to be subject to those laws, provided that the competent authority of the receiving Contracting Party, or its designated representative, gives its consent.

Article 8. State employees and diplomatic and consular personnel

1. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1, nationals of one Contracting Party who are employed in the territory of the other Party in the service of a diplomatic mission or consular office of the first Party shall be subject to the laws on social security, indicated in article 2, of the second Contracting Party, unless, within a period of six months of the date on which they begin their service or of the entry into force of this Agreement, they opt to be subject to the laws of the first Contracting Party.

3. Without prejudice to the provisions of paragraph 1, the provisions of paragraph 2 of this article shall also apply to persons employed as service staff of a diplomatic mission or consular office and to persons who are employed as service staff by members of the diplomatic corps, consular officials, or the administrative and technical personnel of a diplomatic mission or consular office.

4. Public officials sent officially by one Contracting Party to the territory of the other Contracting Party shall remain subject to the laws of the first Party, without time limit.

Article 9. Workers on board a ship or aircraft

1. Dependent workers employed on board a ship shall be subject to the laws of the State of the flag the ship is flying. Workers employed in the loading, unloading or repair of ships, or in surveillance or other services in a port, shall be subject to the laws of the country to the territory of which the port belongs.

2. Itinerant personnel of air transport companies operating in both Contracting Parties shall be subject to the laws of the country in which the company has its headquarters. However, if such personnel reside in the territory of the other Contracting Party, they shall be subject to the laws of that Contracting Party.

TITLE III. PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

Article 10. Health benefits for pension recipients

Persons who reside in the territory of one Contracting Party and receive pensions under the laws of the other Contracting Party shall be entitled to non-cash health benefits, in accordance with the laws of the Contracting Party in which they reside, under the same conditions as persons receiving similar benefits under the laws of that Party.

CHAPTER II. OLD-AGE, DISABILITY AND SURVIVORS' PENSIONS

Article 11. Aggregation of periods of coverage

1. Where, under the laws of one Contracting Party, the acquisition, retention or recovery of entitlement to disability, old-age or survivors' benefits is conditional on the completion of certain periods of coverage, periods completed under the laws of the other Contracting Party shall be added, as necessary, to periods completed under the laws of the first Contracting Party, provided that they do not overlap.

2. Where it is not possible to determine when certain periods of coverage were completed under the laws of one of the Parties, it shall be assumed that such periods do not overlap with periods of coverage completed under the laws of the other Contracting Party.

3. The periods in question shall be calculated in accordance with the laws of the Contracting Party in which the relevant services were performed.

4. Each competent agency or managing entity shall determine, in accordance with its laws, and taking into account the aggregated periods of coverage, whether the person concerned meets the conditions required to obtain a benefit. If that is the case, it shall determine the amount of the benefit to which the person concerned would be entitled if all the aggregated periods had been completed under its own laws and shall establish that amount in proportion to the periods completed exclusively under those laws.

5. The entitlement to benefits of persons who, taking into account the aggregated computable periods, do not simultaneously meet the conditions set out in the laws of the two Contracting Parties, shall be determined in accordance with the laws of each Party, as and when those conditions are fulfilled.

6. In application of this Agreement, pensions granted on the basis of aggregation of periods of coverage shall be brought in line with the amount of the minimum pension established in the laws of each Contracting Party, the amount of the minimum pension being determined at the prevailing level in each Contracting Party and in proportion to the time actually contributed in each of them.

Article 12. Treatment of periods of coverage as equivalent

If, under the laws of one Contracting Party, the granting of benefits is conditional on the worker having been subject to those laws at the time when the circumstance giving rise to the benefit occurred, that condition shall be considered to have been fulfilled if, upon verification, it is determined that the worker was contributing to or receiving a pension in the other Contracting Party at that time.

Article 13. Periods shorter than one year

The competent agencies or managing entities of the Contracting Parties shall grant benefits only if the periods of coverage completed under the applicable laws add up to at least one year, unless those periods alone confer an entitlement to a benefit under those laws.

Article 14. Determination of disability for State-administered systems

1. In order to determine a decline in the ability to work with a view to granting disability pensions, the competent agency or managing entity of each Contracting Party shall carry out an evaluation in accordance with the applicable laws. The necessary medical examinations shall be carried out by the competent agency or managing entity of the place of residence at the request of the competent agency or managing entity of the other Contracting Party.

2. For the purposes of the preceding paragraph, the competent agency or managing entity of the Contracting Party in which the beneficiary resides shall make available to the competent agency or managing entity of the other Contracting Party, at the latter's request and free of charge, the medical reports and documents in its possession.

3. In the event that the competent agency or managing entity of Peru deems it necessary that medical examinations in its sole interest be carried out in Chile, such examinations shall be paid for by the competent agency or managing entity. However, in such situation, the competent agency or managing entity shall directly request the person concerned to reimburse 50 per cent of the cost of such examinations.

4. In the event that the Chilean competent agency or managing entity deems it necessary that medical examinations in its sole interest be carried out in Peru, the cost of such examinations shall be covered in accordance with Chilean domestic law.

For pension systems based on individual funding

5. In order to determine a decline in the ability to work with a view to granting disability pensions, the competent agency or managing entity of each Contracting Party shall carry out an evaluation in accordance with the applicable laws. The necessary medical examinations shall be carried out by the competent agency or managing entity of the place of residence at the request of the competent agency or managing entity of the other Contracting Party.

6. For the purposes of the preceding paragraph, the competent agency or managing entity of the Contracting Party in which the beneficiary resides or has resided shall make available to the competent agency or managing entity of the other Contracting Party, at the latter's request and free of charge, the medical reports and documents in its possession.

7. In the event that the competent agency or managing entity of one Contracting Party deems it necessary that medical examinations in its sole interest be carried out in the other Contracting Party, such examinations shall be paid for in accordance with the domestic laws of the first Contracting Party.

Where new examinations are requested in connection with a claim filed against a disability ruling issued in Chile, the cost of such examinations shall be covered in the manner indicated in the preceding paragraph, unless the claim is filed by a Chilean competent agency or managing entity or by an insurance company, in which case the costs shall be borne by the claimant.

In the case of workers participating in the Chilean individually funded system, the Chilean competent agency or managing entity shall reimburse the total cost of these examinations, and shall request the person concerned to pay a share. However, the Chilean competent agency or managing entity may deduct the cost borne on behalf of the person concerned from the pension due or from the balance of the individually funded account.

Article 15. Burial allowances

Burial allowances shall be governed by the laws that were applicable to the insured person at the place and date of death.

Article 16. Application of Peruvian laws

A. Private pension system

1. Participants in a private pension fund in Peru shall fund their pensions out of the accumulated balance in their individually funded accounts, which, if applicable, shall include the recognition bond. Where this is insufficient to fund pensions in an amount at least equal to that of the minimum State-guaranteed pension, access to that benefit may be verified, in accordance with the legal regulations in force, by aggregating the computable periods in accordance with article 11 and determining the amount of the minimum pension at the prevailing level in Peru and in proportion to the time actually contributed in that country.

2. For the purposes of determining fulfilment of the requirements of the Peruvian laws on early retirement in the individually funded system, the income subject to contributions received in both contracting countries shall be taken into account, as established in the domestic regulations of Peru. For the calculation of average income, the conversion factors established by the competent agency or managing entity of Peru shall be used.

3. The recognition bond may be redeemed or liquidated only in cases where it is determined that the requirements for redemption have been met, in accordance with Peruvian law.

4. Without prejudice to the provisions of the preceding paragraphs, workers who participate in the individually funded social security system in Peru may voluntarily contribute to that system as self-employed workers during the time they reside in Chile, while also complying with the laws of the latter Party regarding the obligation to contribute. Workers who opt to take advantage of this benefit shall be exempt from paying contributions to fund health benefits in Peru.

B. National pension system

5. The benefits granted by the Office of social security standardization (ONP) are retirement, disability and survivors' pensions, the latter of which include pensions for widows, orphans and ascendants.

6. The managing entity or competent agency shall determine the amount of the benefit as if all the periods of coverage had been completed under its own laws and, for the purposes of paying the benefit, shall calculate the share that it owes on the basis of the ratio between the periods of coverage completed exclusively under those laws and the total periods of coverage required under Peruvian law.

Article 17. Application of Chilean laws

1. Participants in a private pension fund shall fund their pensions in Chile out of the accumulated balance in their individually funded accounts. Where this is insufficient to fund pensions in an amount at least equal to that of the minimum State-guaranteed pension, participants shall be entitled to aggregation of computable periods in accordance with article 11 in order to access the minimum old-age or disability pension benefit. Survivors' pension beneficiaries shall

have the same entitlement. The amount of the minimum pension shall be determined in accordance with Chilean laws and in proportion to the time actually contributed in that country.

2. For the purposes of determining fulfilment of the requirements of the Chilean laws on early retirement in the individually funded system, income subject to contributions received in both contracting countries shall be taken into account, as established in the domestic regulations of Chile. For the calculation of average income, the conversion factors established by the competent agency or managing entity of Chile shall be used.

3. Workers who participate in the individually funded system in Chile may voluntarily contribute to that system as self-employed workers during the time they reside in Peru, while also complying with the laws of that country regarding the obligation to contribute. Workers who opt to take advantage of this benefit shall be exempt from the obligation to pay contributions to fund health benefits in Chile.

4. Investors in or contributors to the pension schemes administered by the Institute of social security standardization shall also be entitled to the computation of periods in accordance with article 11 in order to access the pension benefits established in the laws applicable to them.

5. In the cases envisaged in paragraphs 1 and 4 of this article, the competent agency or managing entity shall determine the amount of the benefit as if all the aggregated periods of coverage had been completed under its own laws and, for the purposes of paying the benefit, shall calculate the share that it owes on the basis of the ratio between the periods of coverage completed exclusively under those laws and the total periods of coverage required by the respective social security scheme.

6. With regard to the minimum pensions for which the Institute of Social Security Standardization is responsible, entitlement to such pensions shall be determined in the manner envisaged in the preceding paragraph and the amount to be paid shall be calculated on the basis of the ratio between the periods of coverage completed exclusively in Chile and the total periods of coverage recorded in both Contracting Parties.

7. Persons receiving pensions under Peruvian law and residing in Chile shall be entitled to non-cash health benefits, in accordance with Chilean law, under the same conditions as Chilean pension recipients.

Article 18. Transfer of social security funds between pension systems

1. For the purpose of the benefits granted by the individually funded system of Chile and the private pension system of Peru, the right of workers to transfer the accumulated balance in their individually funded accounts from one Contracting Party to the other is recognized, so that the accounts may be administered by the Administrator of Private Pension Funds of their choice.

2. Transfer of funds involves the transfer of pension funds deposited in individually funded accounts to another managing entity or competent agency of the individually funded system of the other country, in which the persons concerned are going to reside permanently. In order to guarantee a pension, it is necessary to demonstrate that contributions have been made to an individually funded system for at least 60 months, or to have the status of pension recipient in the country to which it is desired that the funds should be transferred. The competent authorities, by joint agreement, may raise or lower that limit.

To that end, this process involves the transfer of the resources of the individual account plus the recognition bond, if any, as long as the redemption or liquidation requirements of each country are met, as provided in paragraph 4.

3. The funds transferred shall include all the compulsory contributions, voluntary contributions, agreed deposits or employer's contributions, as applicable, which the participant has in his or her individual account on the date of transfer. These funds shall be paid into the worker's individual account in the receiving Party as compulsory contributions.

In the case of voluntary contributions paid in Chile, these may form part of the transfer referred to in the preceding paragraph, in which case they shall be subject to the Chilean tax rules applicable to withdrawals of such contributions from an individually funded account. For the purposes of this taxation, these participants shall be considered as pension recipients. The transfer of funds shall also take into account the agreed deposits that the participant may have with any Administrator of Pension Funds other than the one with which he or she is affiliated or another institution, in accordance with the applicable laws.

4. Social security benefits granted in Chile which have been funded with social security funds originating from Peru shall remain subject to Chilean tax regulations in the part corresponding to the contributions paid into the Chilean social security system and in terms of the yield achieved by the transferred funds.

5. The recognition bond may be redeemed or liquidated only in cases where it is determined that the requirements for redemption or liquidation have been met, in accordance with the laws of the Contracting Party in which the bond was issued. If, pursuant to the laws of the Contracting Party from which the social security funds are withdrawn, a recognition bond may not be redeemed or liquidated, the participant shall have the right to trade the bond in the formal secondary market of that Contracting Party, solely for the purposes of the transfer.

6. The disability, survival and funeral expenses or mortuary fee of workers participating in the individually funded system shall be governed by the laws of the country in which the Administrator is domiciled. For these purposes, workers who transfer their individually funded accounts, in accordance with the provisions above, shall have the status of new or recently enrolled workers.

7. Participants who, on the date of entry into force of the Agreement, are receiving pensions under the laws of one of the Contracting Parties, shall have the right to request the other Party to transfer their social security funds to the Party in which they receive a pension, which, once it receives the funds, shall recalculate the amount of the benefit or add to it, as the case may be, in accordance with its laws.

TITLE IV. CHAPTER I. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 19. Timely submission of claims, notices or appeals

Any claims, notices, appeals or other documents which, under the laws of one Contracting Party, must be submitted to the appropriate authorities or agencies of that Party within a specified period, shall be considered to have been submitted to that Party if they were submitted within that same period to the appropriate authority or agency of the other Contracting Party.

Article 20. Exemption from taxes, duties and authentication requirements

All instruments, documents and scripts relating to the implementation of this Agreement, administrative arrangements and other additional instruments shall be exempt from taxes, stamps, seals or signets, and from the requirement of endorsement or authentication by the diplomatic or consular authorities; certification by the respective liaison body shall suffice.

Article 21. Mutual assistance

1. For the implementation of this Agreement, the competent authorities, liaison bodies and competent agencies of the Contracting Parties shall assist each other free of charge.

2. The liaison bodies undertake to exchange information relating to the measures adopted to improve the implementation of this Agreement, administrative arrangements and other additional instruments.

3. The competent authorities, liaison bodies and competent agencies of the Contracting Parties may communicate with each other and with interested persons directly or through diplomatic and consular channels.

4. The diplomatic and consular authorities of the Contracting Parties, without special governmental mandate, may represent their own nationals before the competent social security authorities and managing entities of the other Contracting Party, at the express request of the persons concerned, for the sole purpose of facilitating the granting of medical or cash benefits, not including collection of such benefits. In the case of individually funded systems, such representation shall not be accepted for the purpose of selecting the pension modality to be chosen by the participant.

Article 22. Protection of information

Any personal information remitted or transmitted from one Party to the other shall be used for the sole purpose of implementing this Agreement and shall be protected in accordance with the principle of protection of privacy and confidentiality of private life, under the provisions of the relevant domestic laws.

Article 23. Currency, means of payment and provisions relating to foreign currency

1. Payments under this Agreement may be made in the currency of either of the Contracting Parties, or in United States dollars, at the request of the person concerned.

2. The date and means of payment of a benefit shall be in accordance with the laws of the Party making such payment.

3. If one of the Contracting Parties imposes restrictions on foreign currency, both Contracting Parties shall agree, without delay, on the necessary measures to ensure transfers between the Contracting Parties of any sums payable in accordance with this Agreement.

Article 24. Responsibilities of the competent authorities

The competent authorities of the Contracting Parties shall:

- (a) Draw up the administrative arrangements necessary for the implementation of this Agreement;
- (b) Designate their respective liaison bodies;
- (c) Communicate to each other the measures taken at the domestic level for the implementation of this Agreement;
- (d) Notify each other of any changes to the laws referred to in article 2;
- (e) Extend to each other their good offices and the broadest possible technical and administrative assistance for the implementation of this Agreement.

Article 25. Settlement of disputes

1. The competent authorities shall resolve through negotiations any differences of interpretation with regard to this Agreement and its administrative arrangements.
2. If a dispute cannot be resolved through negotiations within six months of the first request for negotiations, it shall be submitted to a three-member arbitral tribunal, the composition and procedure of which shall be established in the Administrative Arrangement. The decisions of the arbitral tribunal shall be binding and final.

CHAPTER II. TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 26. Computation of periods prior to the entry into force of the Agreement

1. Periods of coverage completed under the laws of one of the Contracting Parties prior to the entry into force of this Agreement shall be taken into account in determining entitlement to the benefits awarded thereunder.
2. The foregoing shall not affect the rules on limitation or expiry in force in each of the Contracting Parties.

Article 27. Contingencies occurring before the Agreement came into force

1. The implementation of this Agreement shall grant entitlement to benefits for contingencies that occurred prior to the date of its entry into force. However, payment shall not be made for periods prior to the entry into force of the Agreement.
2. Benefits which have been cancelled by one or both Contracting Parties or entitlements which were denied before the entry into force of this Agreement shall be reviewed at the request of the persons concerned or ex officio, taking into account the provisions of the Agreement. The amount of the pension resulting from this recalculation may not be less than the amount of the original benefit. No lump-sum benefits that have been paid may be reviewed.

CHAPTER III. FINAL PROVISIONS

Article 28. Duration of the Agreement

1. This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be denounced by either of the two Contracting Parties. Notification of such denunciation shall be provided through the diplomatic channel, and the Agreement shall cease to have effect 12 months after the date of denunciation.

2. In the event of denunciation, the provisions of this Agreement shall continue to apply to rights already recognized, notwithstanding any restrictive provisions under the laws of either Contracting Party regarding cases of beneficiaries residing abroad.

3. The Contracting Parties shall enter into a special agreement to guarantee any rights in process of being acquired which are derived from periods of coverage or their equivalent completed prior to the date of termination of the Agreement.

Article 29. Approval and validity of the Agreement

1. This Agreement shall be approved in accordance with the domestic laws of each of the Contracting Parties.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the month in which the final notification was received from the Parties of having fulfilled all the constitutional and regulatory requirements for its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives have signed this Agreement.

DONE in two copies at Santiago, Chile, on 23 August 2002.

For the Republic of Peru:
ALLAN WAGNER TIZÓN
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Chile:
RICARDO SOLARI SAAVEDRA
Minister of Labour and Social Security

[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

La République du Pérou et la République du Chili,

Désirant réglementer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit :

Titre I

Dispositions générales

Article premier – Définitions

1. Aux fins du présent Accord :

- a) Le terme « législation » désigne les lois, règlements et dispositions relatifs aux cotisations et prestations des systèmes de sécurité sociale visés à l'article 2 du présent Accord ;
- b) Le terme « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Pérou, le Ministre de l'économie et des finances et, en ce qui concerne le Chili, le Ministre du travail et de la sécurité sociale ;
- c) Le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme chargé de la coordination entre les organismes compétents dans le cadre de l'application du présent Accord ainsi que d'informer les parties concernées sur les droits et obligations qui en découlent ;
- d) Les termes « institution compétente » ou « entité gestionnaire » désignent l'institution ou l'entité chargée, dans chaque cas, de l'application de la législation visée à l'article 2 du présent Accord.
- e) Le terme « pension » désigne une prestation en espèces, y compris les suppléments, allocations et majorations ;
- f) Le terme « période d'assurance » désigne toute période de cotisation reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance ;
- g) Le terme « travailleur dépendant » désigne toute personne au service d'un employeur dans une relation de subordination et de dépendance, ainsi que toute personne considérée comme telle en vertu de la loi ;
- h) Le terme « travailleur indépendant » désigne toute personne qui exerce, à titre indépendant, une activité dont elle tire un revenu, ainsi que toute personne considérée comme telle en vertu de la loi ;
- i) Le terme « personnes couvertes » désigne les bénéficiaires des systèmes de sécurité sociale, de protection sociale et d'assurance sociale visés à l'article 2 ;
- j) Les termes « participant » ou « personne assurée » désignent toute personne employée ou tout travailleur indépendant participant à un système de capitalisation individuelle ou à un système contributif de l'une des Parties contractantes ;

- k) Le terme « obligation de reconnaissance » désigne tout titre exprimé en espèces qui, conformément au droit interne, représente les périodes de cotisation versées à un système contributif avant l'affiliation à un système de capitalisation individuelle ;
- l) Le terme « cotisations obligatoires » désigne les cotisations que les travailleurs sont tenus de verser aux systèmes de pensions appropriés ;
- m) Le terme « cotisations volontaires » désigne les cotisations que les travailleurs versent volontairement au système de pensions et qui sont destinées exclusivement au paiement des pensions, selon la réglementation de chaque pays ;
- n) Le terme « dépôts convenus » désigne les montants que les travailleurs dépendants ont convenu de payer, en vertu d'un contrat signé avec leur employeur, et qui sont payables par ce dernier à une entité autorisée afin d'augmenter ou d'accélérer leurs pensions ;
- o) Le terme « cotisations de l'employeur » désigne les montants qui sont déposés par l'employeur sur les comptes individuels des travailleurs chez une entité autorisée afin d'augmenter ou d'accélérer leurs pensions, selon les mécanismes que chaque Partie contractante établit dans sa législation ;
- p) Le terme « pension garantie par l'État » désigne la pension minimale garantie par l'État aux participants du système de pension par capitalisation individuelle qui remplissent les conditions fixées par la loi.

2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification que leur attribue la législation applicable.

Article 2 – Champ d'application matériel

1. Le présent Accord s'applique :

A) En ce qui concerne le Chili, à la législation relative :

- a) au système des pensions de vieillesse, d'invalidité et de réversion, basé sur la capitalisation individuelle ;
- b) aux régimes de pension de vieillesse, d'invalidité et de réversion administrés par l'Institut de normalisation prévisionnelle ;
- c) aux régimes d'assurance maladie, aux fins des articles 10 et 17, paragraphe 7.

B) En ce qui concerne le Pérou, à la législation relative :

- a) aux dispositions légales des systèmes ou régimes de sécurité sociale gérés par l'Office de normalisation prévisionnelle (ONP) en ce qui concerne les pensions d'invalidité, de retraite et de réversion ;
- b) au système de pension privé, géré par les Administrateurs des fonds de pension privés (AFP) et supervisé par le Bureau du surintendant des banques et des assurances (SBS) ;
- c) aux régimes d'assurance maladie, aux fins de l'article 10.

C) Dispositions communes :

- a) Le présent Accord s'applique également à toutes les dispositions légales futures complétant ou modifiant celles mentionnées au paragraphe précédent, sauf si

l'autorité compétente d'une Partie informe l'autre d'une objection dans un délai de six mois à compter de la notification de ces lois, règlements ou dispositions :

- b) Les dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties n'affectent pas l'application des dispositions du présent Accord ;
- c) En matière de fiscalité, la législation fiscale interne de chaque État s'applique, sans préjudice de l'application de la Convention contre la double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital, signée entre les Républiques du Pérou et du Chili en 2001.

Article 3 – Champ d'application personnel

Le présent Accord s'applique :

- a) aux ressortissants des deux Parties contractantes qui sont ou ont été soumis à la législation visée à l'article 2 du présent Accord ;
- b) aux ressortissants d'un pays tiers qui sont ou ont été soumis à la législation visée à l'article 2 ;
- c) aux personnes qui dérivent leurs droits des personnes visées aux points a) et b).

Article 4 – Égalité de traitement

Les personnes visées à l'article 3 qui résident ou séjournent sur le territoire d'une Partie contractante ont les mêmes obligations et droits que ceux que la législation de cette Partie contractante prévoit pour ses ressortissants.

Article 5 – Export de pensions

1. Les pensions d'invalidité, de vieillesse et de réversion versées au titre de la législation d'une Partie contractante ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues ou retenues du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, à la seule exception des coûts et impôts associés au paiement de la prestation.

2. Les prestations visées au paragraphe précédent, lorsqu'elles sont dues par une Partie contractante à des bénéficiaires de l'autre Partie contractante résidant dans un pays tiers, sont versées dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles versées à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.

Titre II

Dispositions concernant la législation applicable

Article 6 – Règle générale

Les travailleurs auxquels s'applique le présent Accord sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils travaillent ou ont travaillé, quel que soit leur domicile ou le siège de leur employeur, sauf les exceptions indiquées aux articles 7 à 9.

Article 7 – Règles spéciales pour les travailleurs en mission

Les travailleurs dépendants qui exercent une activité sur le territoire d'une Partie contractante et qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie contractante pour une durée limitée demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée de leur séjour n'excède pas trois mois. Si cette limite de temps est dépassée, ils peuvent rester soumis à cette législation, pourvu que l'autorité compétente de la Partie contractante d'accueil ou un(e) représentant(e) désigné(e) donne son accord.

Article 8 – Employés de l'État et personnel diplomatique et consulaire

1. Le présent Accord ne peut porter atteinte aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les ressortissants d'une Partie contractante qui sont employés sur le territoire de l'autre Partie au service d'une mission diplomatique ou d'un bureau consulaire de la première Partie sont soumis à la législation sur la sécurité sociale, indiquée à l'article 2, de la seconde Partie contractante, à moins que, dans un délai de six mois à compter de la date de leur entrée en service ou de l'entrée en vigueur du présent Accord, ils ne choisissent d'être soumis à la législation de la première Partie contractante.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent également aux personnes employées comme personnel de service d'une mission diplomatique ou d'un bureau consulaire et aux personnes employées comme personnel de service par des membres du corps diplomatique, des fonctionnaires consulaires ou le personnel administratif et technique d'une mission diplomatique ou d'un bureau consulaire.

4. Les agents publics envoyés officiellement par une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante restent soumis à la législation de la première Partie, sans limitation de durée.

Article 9 – Travailleurs à bord d'un navire ou d'un avion

1. Les travailleurs dépendants employés à bord d'un navire sont soumis à la législation de l'État dont le navire bat le pavillon. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement ou à la réparation des navires, ou à la surveillance ou à d'autres services dans un port sont soumis à la législation du pays au territoire duquel le port appartient.

2. Le personnel itinérant des entreprises de transport aérien opérant dans les deux Parties contractantes est soumis à la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège. Toutefois, si ce personnel réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, il est soumis à la législation de cette Partie contractante.

Titre III

Dispositions relatives aux prestations

Article 10 – Prestations de santé pour les bénéficiaires de pension

Les personnes qui résident sur le territoire d'une Partie contractante et qui perçoivent des pensions en vertu de la législation de l'autre Partie contractante ont droit à des prestations de santé en nature conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle elles résident, dans les mêmes conditions que les personnes bénéficiant de prestations similaires en vertu de la législation de cette Partie.

Chapitre II

Pensions de vieillesse, d'invalidité et de réversion

Article 11 – Totalisation des périodes d'assurance

1. Lorsque, en application de la législation d'une Partie contractante, l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à une pension d'invalidité, de vieillesse ou de réversion est subordonné à l'accomplissement de certaines périodes d'assurance, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante sont ajoutées, en tant que de besoin, aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie contractante, pourvu qu'elles ne se chevauchent pas.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer quand certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes, il est présumé que ces périodes ne se chevauchent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante.

3. Les périodes en question sont calculées conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle les services en question ont été effectués.

4. Chaque institution compétente ou entité gestionnaire détermine, conformément à sa législation et en tenant compte des périodes d'assurance totalisées, si la personne concernée remplit les conditions nécessaires pour avoir droit à une prestation. Dans l'affirmative, l'institution compétente ou entité gestionnaire calcule le montant de la prestation auquel la personne concernée aurait droit si toutes les périodes totalisées avaient été accomplies conformément à la législation de la Partie dont elle relève et fixe le montant sur la base des périodes accomplies exclusivement conformément à cette législation.

5. Le droit à prestations des personnes qui, compte tenu des périodes d'assurance totalisées calculables, ne remplissent pas les conditions prévues par la législation des deux Parties contractantes, est déterminé conformément à la législation de chaque Partie, à mesure que ces conditions sont remplies.

6. En application du présent Accord, les pensions accordées sur la base de la totalisation des périodes d'assurance sont alignées sur le montant de la pension minimale fixée par la législation de chaque Partie contractante, le montant de la pension minimale étant déterminé au niveau en vigueur dans chaque Partie contractante et proportionnellement au temps effectivement cotisé dans chacune d'elles.

Article 12 – Traitement des périodes d'assurance comme équivalentes

Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'octroi des prestations est subordonné à la condition que le travailleur ait été soumis à cette législation au moment de la survenance de l'événement donnant droit à la prestation, cette condition est considérée comme remplie si, après vérification, il est déterminé que le travailleur cotisait à une pension ou en bénéficiait dans l'autre Partie contractante à ce moment-là.

Article 13 – Périodes inférieures à un an

Les institutions compétentes ou entités gestionnaires des Parties contractantes accordent des prestations uniquement si les périodes d'assurance accomplies sous la législation applicable totalisent au moins une année, à moins que ces périodes ne donnent droit à elles seules à une prestation en vertu de ladite législation.

Article 14 – Détermination de l'invalidité pour les systèmes administrés par l'État

1. Pour déterminer la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des pensions d'invalidité, l'institution compétente ou entité gestionnaire de chacune des Parties contractantes effectue une évaluation conformément à la législation applicable. Les examens médicaux nécessaires sont effectués par l'institution compétente ou entité gestionnaire du lieu de résidence à la demande de l'institution compétente ou entité gestionnaire de l'autre Partie contractante.

2. Aux fins du paragraphe précédent, l'institution compétente ou entité gestionnaire de la Partie contractante dans laquelle réside le bénéficiaire met à disposition de l'institution compétente ou entité gestionnaire de l'autre Partie, à la demande de cette dernière et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.

3. Si l'institution compétente ou entité gestionnaire du Pérou estime nécessaire que des examens médicaux dans son seul intérêt soient effectués au Chili, ces examens seront payés par l'institution compétente ou entité gestionnaire. Toutefois, dans cette situation, l'institution compétente ou entité gestionnaire demande directement à la personne concernée de rembourser 50 % du coût de ces examens.

4. Dans le cas où l'institution compétente ou entité gestionnaire chilienne estime nécessaire que des examens médicaux dans son seul intérêt soient effectués au Pérou, le coût de ces examens est couvert conformément au droit interne chilien.

Pour les systèmes de pension basés sur la capitalisation individuelle

5. Pour déterminer la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des pensions d'invalidité, l'institution compétente ou entité gestionnaire de chacune des Parties contractantes effectue une évaluation conformément à la législation applicable. Les examens médicaux nécessaires sont effectués par l'institution compétente ou entité gestionnaire du lieu de résidence à la demande de l'institution compétente ou entité gestionnaire de l'autre Partie contractante.

6. Aux fins du paragraphe précédent, l'institution compétente ou entité gestionnaire de la Partie contractante dans laquelle réside le bénéficiaire met à disposition de l'institution compétente ou entité gestionnaire de l'autre Partie, à la demande de cette dernière et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.

7. Dans le cas où l'institution compétente ou entité gestionnaire d'une Partie contractante estime nécessaire que des examens médicaux dans son seul intérêt soient effectués dans l'autre Partie contractante, ces examens sont payés conformément au droit interne de la première Partie contractante.

Lorsque de nouveaux examens sont demandés dans le cadre d'une réclamation déposée contre une décision d'invalidité rendue au Chili, le coût de ces examens est couvert comme indiqué au paragraphe précédent, à moins que la réclamation ne soit déposée par une institution compétente ou entité gestionnaire chilienne ou par une compagnie d'assurance, auquel cas les coûts sont à la charge du demandeur.

Dans le cas des travailleurs participant au système chilien par capitalisation individuelle, l'institution compétente ou entité gestionnaire chilienne rembourse le coût total de ces examens et demande à la personne concernée d'en payer une partie. Toutefois, l'institution compétente ou entité gestionnaire chilienne peut déduire le coût supporté pour le compte de la personne concernée de la pension due ou du solde du compte de capitalisation individuelle.

Article 15 – Indemnités funéraires

Les indemnités funéraires sont régies par la législation qui était applicable à la personne assurée au lieu et à la date du décès.

Article 16 – Application de la législation péruvienne

A. Système de pensions privé

1. Les participants à un fonds de pension privé au Pérou financent leurs pensions à partir du solde accumulé sur leurs comptes individuels par capitalisation, qui, le cas échéant, comprennent l'obligation de reconnaissance. Lorsque cela est insuffisant pour financer des pensions d'un montant au moins égal à celui de la pension minimale garantie par l'État, l'accès à cette prestation peut être vérifié, conformément aux dispositions légales en vigueur, en totalisant les périodes calculables conformément à l'article 11 et en déterminant le montant de la pension minimale au niveau en vigueur au Pérou et proportionnellement au temps effectivement cotisé dans ce pays.

2. Pour déterminer si les conditions requises par la législation péruvienne en matière de retraite anticipée dans le système de capitalisation individuelle sont remplies, les revenus soumis à cotisation perçus dans les deux pays contractants sont pris en compte, conformément à la réglementation interne du Pérou. Pour le calcul du revenu moyen, les facteurs de conversion établis par l'institution compétente ou entité gestionnaire du Pérou sont utilisés.

3. L'obligation de reconnaissance peut être remboursée ou liquidée uniquement dans les cas où il est déterminé que les conditions de remboursement ont été remplies, conformément à la loi péruvienne.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les travailleurs qui participent au système de sécurité sociale par capitalisation individuelle au Pérou peuvent cotiser volontairement à ce système en tant que travailleurs indépendants pendant la période où ils résident au Chili, tout en respectant également la législation de cette dernière Partie concernant l'obligation de cotiser. Les travailleurs qui choisissent de bénéficier de cette prestation sont exemptés du paiement des cotisations destinées à financer les prestations de santé au Pérou.

B. Système de pensions national

5. Les prestations accordées par l'Office de normalisation prévisionnelle (ONP) sont les pensions de retraite, d'invalidité et de réversion, ces dernières comprenant les pensions pour les veufs et veuves, les orphelins et les ascendants.

6. L'institution compétente ou entité gestionnaire détermine le montant de la prestation comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous sa propre législation et, aux fins du paiement de la prestation, calcule la part qu'elle doit en fonction du rapport entre les périodes d'assurance accomplies exclusivement sous cette législation et le total des périodes d'assurance requis par la législation péruvienne.

Article 17 – Application de la législation chilienne

1. Les participants à un fonds de pension privé financent leurs pensions au Chili à partir du solde accumulé sur leurs comptes individuels par capitalisation. Lorsque cela est insuffisant pour financer des pensions d'un montant au moins égal à celui de la pension minimale garantie par l'État, les participants ont droit à la totalisation des périodes calculables conformément à l'article 11 pour accéder à la prestation minimale de pension de vieillesse ou d'invalidité. Les bénéficiaires de pension de réversion jouissent du même droit. Le montant de la pension minimale est déterminé conformément à la législation chilienne et proportionnellement au temps effectivement cotisé dans ce pays.

2. Pour déterminer si les conditions requises par la législation chilienne en matière de retraite anticipée dans le système de capitalisation individuelle sont remplies, les revenus soumis à cotisation perçus dans les deux pays contractants sont pris en compte, conformément à la réglementation interne du Chili. Pour le calcul du revenu moyen, les facteurs de conversion établis par l'institution compétente ou entité gestionnaire du Chili sont utilisés.

3. Les travailleurs qui participent au système de capitalisation individuelle au Chili peuvent cotiser volontairement à ce système en tant que travailleurs indépendants pendant la période où ils résident au Pérou, tout en respectant également la législation de ce pays concernant l'obligation de cotiser. Les travailleurs qui choisissent de bénéficier de cette prestation sont exemptés de l'obligation de paiement des cotisations destinées à financer les prestations de santé au Chili.

4. Les contributeurs ou cotisants aux régimes de pension gérés par l'Institut de normalisation prévisionnelle ont également droit au calcul des périodes conformément à l'article 11 afin d'accéder aux prestations de pension définies par les lois qui leur sont applicables.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 4 du présent article, l'institution compétente ou entité gestionnaire détermine le montant de la prestation comme si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies sous sa propre législation et, aux fins du paiement de la prestation, calcule la part qu'elle doit en fonction du rapport entre les périodes d'assurance accomplies exclusivement sous cette législation et le total des périodes d'assurance requis par le régime de sécurité sociale concerné.

6. En ce qui concerne les pensions minimales dont l'Institut de normalisation prévisionnelle est responsable, le droit à ces pensions est déterminé comme prévu au paragraphe précédent et le montant à verser est calculé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance accomplies exclusivement au Chili et le total des périodes d'assurance enregistrées chez les deux Parties contractantes.

7. Les personnes qui perçoivent des pensions en vertu du droit péruvien et qui résident au Chili ont droit à des prestations de santé en nature, conformément à la législation chilienne, dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de pensions chiliens.

Article 18 – Transfert de fonds de sécurité sociale entre systèmes de pension

1. Aux fins des prestations accordées par le système de capitalisation individuelle du Chili et le système de pension privé du Pérou, le droit des travailleurs à transférer le solde accumulé sur leurs comptes de capitalisation individuelle d'une Partie contractante à l'autre est reconnu, afin que les comptes puissent être administrés par l'administrateur de fonds de pension privés de leur choix.

2. Le transfert de fonds implique le transfert des fonds de pension déposés sur des comptes de capitalisation individuelle vers une autre institution compétente ou entité gestionnaire du système de capitalisation individuelle de l'autre pays, dans lequel les personnes concernées vont résider de manière permanente. Pour garantir une pension, il est nécessaire de démontrer que des cotisations ont été versées à un système de capitalisation individuelle pendant au moins 60 mois, ou d'avoir le statut de bénéficiaire de pension dans le pays vers lequel les fonds doivent être transférés. Les autorités compétentes peuvent relever ou abaisser cette limite d'un commun accord.

À cette fin, ce processus implique le transfert des ressources du compte individuel plus l'obligation de reconnaissance, s'il y en a une, pourvu que les conditions de remboursement ou de liquidation de chaque pays soient respectées, comme prévu au paragraphe 4.

3. Les fonds transférés comprennent toutes les cotisations obligatoires, les cotisations volontaires, les dépôts convenus ou les cotisations de l'employeur, selon le cas, que le participant a sur son compte individuel à la date du transfert. Ces fonds sont versés sur le compte individuel du travailleur dans la Partie d'accueil au titre des cotisations obligatoires.

Dans le cas de cotisations volontaires versées au Chili, celles-ci peuvent faire partie du transfert visé au paragraphe précédent, auquel cas elles sont soumises aux règles fiscales chiliennes applicables aux retraits de ces cotisations d'un compte de capitalisation individuelle. Aux fins de cette imposition, ces participants sont considérés comme des bénéficiaires de pension. Le transfert de fonds tient également compte des éventuels dépôts convenus entre le participant et un administrateur de fonds de pension autre que celui auquel il est affilié ou d'une autre institution, conformément à la législation applicable.

4. Les prestations de sécurité sociale accordées au Chili qui ont été financées par des fonds de sécurité sociale provenant du Pérou restent soumises à la réglementation fiscale chilienne pour la partie correspondant aux cotisations versées au système de sécurité sociale chilien et en termes du rendement obtenu par les fonds transférés.

5. L'obligation de reconnaissance peut être remboursée ou liquidée uniquement dans les cas où il est déterminé que les conditions de remboursement ou de liquidation sont remplies, conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle l'obligation a été émise. Si, en vertu de la législation de la Partie contractante auprès de laquelle les fonds de sécurité sociale sont retirés, une obligation de reconnaissance ne peut être remboursée ou liquidée, le participant a le droit d'échanger l'obligation sur le marché secondaire formel de cette Partie contractante, uniquement aux fins du transfert.

6. Les frais d'invalidité, de réversion et d'obsèques ou les frais mortuaires des travailleurs participant au système de capitalisation individuelle sont régis par la législation du pays dans

lequel l'administrateur est domicilié. À ces fins, les travailleurs qui transfèrent leurs comptes de capitalisation individuelle, conformément aux dispositions ci-dessus, ont le statut de travailleurs nouveaux ou récemment inscrits.

7. Les participants qui, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, perçoivent une pension en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, ont le droit de demander à l'autre Partie de transférer leurs fonds de sécurité sociale à la Partie auprès de laquelle ils perçoivent une pension, laquelle, après avoir reçu les fonds, recalcule le montant de la prestation ou le complète, selon le cas, conformément à sa législation.

Titre IV

Chapitre I

Dispositions diverses

Article 19 – Présentation des réclamations, notifications et recours dans les délais

Les réclamations, notifications, recours et autres documents qui, en vertu de la législation d'une Partie contractante, doivent être soumis aux autorités ou organismes compétents de cette Partie dans un délai déterminé, sont considérés comme ayant été soumis à cette Partie s'ils ont été soumis à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'autre Partie contractante dans ce délai.

Article 20 – Exemption d'impôts, de droits et d'obligation d'authentification

Tous les instruments, documents et écrits relatifs à l'application du présent Accord, tous les arrangements administratifs et autres instruments supplémentaires sont exemptés d'impôts, d'estampilles ou sceaux, et de l'obligation d'attestation ou d'authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires ; la certification par l'organisme de liaison compétent suffit.

Article 21 – Assistance mutuelle

1. Pour l'application du présent Accord, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent réciproquement leurs bons offices gratuitement.

2. Les organismes de liaison s'engagent à échanger des informations relatives aux mesures adoptées pour améliorer l'application du présent Accord, aux arrangements administratifs et aux autres instruments supplémentaires.

3. Les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre eux et avec les personnes intéressées directement ou par la voie diplomatique et consulaire.

4. Les autorités diplomatiques et consulaires des Parties contractantes, sans mandat gouvernemental spécial, peuvent représenter leurs ressortissants auprès des autorités compétentes en matière de sécurité sociale et des entités gestionnaires de l'autre Partie contractante, à la demande expresse des personnes concernées, dans le seul but de faciliter l'octroi de prestations médicales ou en espèces, à l'exclusion du recouvrement de ces prestations. Dans le cas des systèmes de capitalisation individuelle, cette représentation n'est pas acceptée aux fins de la sélection de la modalité de pension à choisir par le participant.

Article 22 – Protection des informations

Toute information personnelle envoyée ou transmise d'une Partie contractante à l'autre sera utilisée uniquement aux fins de l'application du présent Accord et sera protégée conformément au principe de la protection de la vie privée et du secret de la vie privée, dans les conditions prévues par la législation interne pertinente.

Article 23 – Monnaie, moyens de paiement et dispositions relatives aux devises étrangères

1. Les paiements au titre du présent Accord peuvent être effectués dans la monnaie de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou en dollars des États-Unis, à la demande de la personne concernée.

2. La date et les modalités de paiement d'une prestation sont soumises à la législation de la Partie qui effectue ce paiement.

3. Si l'une des Parties contractantes impose des restrictions sur les devises étrangères, les deux Parties contractantes conviennent, sans délai, des mesures nécessaires pour assurer les transferts entre les Parties contractantes de toute somme payable en vertu du présent Accord.

Article 24 – Responsabilités des autorités compétentes

Les autorités compétentes des Parties contractantes :

- a) conviennent des arrangements administratifs nécessaires à l'application du présent Accord ;
- b) désignent leurs organismes de liaison respectifs ;
- c) se communiquent mutuellement les mesures prises au niveau national aux fins de l'application du présent Accord ;
- d) se notifient mutuellement de toute modification de la législation visée à l'article 2 ;
- e) se prêtent mutuellement leurs bons offices ainsi que le concours le plus large possible en matière d'assistance technique et administrative aux fins de l'application du présent Accord.

Article 25 – Règlement des différends

1. Tout différend se rapportant à l'interprétation du présent Accord et de ses arrangements administratifs est réglé par la voie de négociation entre les autorités compétentes.

2. Si un différend ne peut pas être résolu par la négociation dans un délai de six mois à partir de la première demande de négociation, il doit être soumis à un tribunal d'arbitrage formé de trois membres et dont la composition et la procédure sont fixées par l'arrangement administratif. Les décisions du tribunal d'arbitrage sont contraignantes et définitives.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 26 – Calcul des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord

1. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour déterminer le droit à prestations octroyé au titre de l'Accord.

2. Ce qui précède ne modifie en rien les règles sur la prescription ou l'expiration en vigueur dans chacune des Parties contractantes.

Article 27 – Événements survenus avant l'entrée en vigueur de l'Accord

1. L'application du présent Accord ouvre le droit à prestations pour des événements survenus avant la date de son entrée en vigueur. Néanmoins, aucun paiement ne sera versé pour des périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Les prestations qui ont été supprimées par l'une des Parties contractantes ou les deux, ou les droits à prestations qui ont été refusés avant l'entrée en vigueur du présent Accord sont révisés à la demande des personnes concernées ou d'office, en tenant compte des dispositions de l'Accord. Le montant de la pension résultant de ce nouveau calcul ne peut pas être inférieur au montant de la prestation initiale. Les prestations consistant en un montant unique qui a déjà été versé ne sont pas révisées.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 28 – Durée de l'Accord

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes. Cette dénonciation est notifiée par voie diplomatique et l'Accord cesse de produire ses effets douze mois après la date de la dénonciation.

2. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord continuent de s'appliquer aux droits déjà reconnus, nonobstant toute disposition restrictive de la législation de l'une ou l'autre Partie contractante concernant les cas de bénéficiaires résidant à l'étranger.

3. Les Parties contractantes concluent un accord spécial pour garantir les droits en cours d'acquisition qui sont issus de périodes d'assurance ou de leur équivalent accomplies avant la date de résiliation de l'Accord.

Article 29 – Approbation et validité de l'Accord

1. Le présent Accord est approuvé conformément au droit interne de chacune des Parties contractantes.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois durant lequel a été reçue la notification finale des Parties indiquant que toutes les conditions constitutionnelles et réglementaires à son entrée en vigueur ont été remplies.

EN FOI DE QUOI, les représentant dûment autorisés ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Santiago, au Chili, le 23 août 2002.

Pour la République du Pérou :
ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministre des affaires étrangères

Pour la République du Chili :
RICARDO SOLARI SAAVEDRA
Ministre du travail et de la sécurité sociale